



# Análisis crítico de las políticas medioambientales del gobierno de Iván Duque y su relación con las propuestas del gobierno de Gustavo Petro

Mayor (MY) Oscar David Segovia Guerrón

Artículo para optar al título profesional:

Magister en Estrategia y Geopolítica

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
Bogotá D.C., Colombia  
2025

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>Nombre del estudiante</b>	: Mayor (MY) Oscar David Segovia Guerrón
<b>Identificación</b>	: 1032380839
<b>Programa académico</b>	: Maestría en Estrategia y Geopolítica
<b>Tutor metodológico</b>	: Doc. Ginneth Esmeralda Narváez Jaimes.
<b>Tutor temático</b>	: CR (r) Ramon Niño Chia
<b>Fecha de entrega</b>	: 26 de agosto de 2025
<b>Extensión</b>	: 7.820 palabras

#### **DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS**

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

#### **AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN**

El autor autoriza / que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

# Análisis crítico de las políticas medioambientales del gobierno de Iván Duque y su relación con las propuestas del gobierno de Gustavo Petro

Critical analysis of the environmental policies of Iván Duque's  
government and their relationship with the proposals of Gustavo  
Petro's government

**Oscar David Segovia Guerrón<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Candidato a magíster en estrategia y geopolítica, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. <https://orcid.org/0009-0008-2721-198X> - Contacto: oscar.segovia@esdeg.edu.co.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

**Resumen:** El presente artículo es un acercamiento de manera analítica a los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, quienes han trazado dos rutas distintas para el futuro ambiental de Colombia. Mientras Duque, bajo la bandera del "crecimiento verde", impulsó la transición energética con incentivos fiscales y amplió las áreas marinas protegidas, su gestión se vio empañada por un aumento histórico de la deforestación. Por su parte, Petro ha elevado el medio ambiente a pilar central de su gobierno actual, logrando una significativa reducción de la deforestación a través de acuerdos sociales y posicionando al país como un líder en la diplomacia climática global, culminando con la ratificación del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, ambos mandatos han enfrentado desafíos complejos, desde la persistente violencia contra líderes ambientales hasta la dificultad de una gobernanza ambiental efectiva, evidenciando que el camino hacia la sostenibilidad sigue siendo un campo de batalla en constante evolución.

**Palabras clave:** Acuerdo de Escazú; Biodiversidad; Deforestación; Gobernanza Ambiental; Líderes Ambientales; Transición Energética

**Abstract:** This article provides an analytical overview of the governments of Ivan Duque and Gustavo Petro, who have charted two distinct paths for Colombia's environmental future. While Duque, under the banner of "green growth," promoted the energy transition with tax incentives and expanded marine protected areas, his administration was marred by a historic surge in deforestation. Petro, for his part, has elevated the environment to a central pillar of his current administration, achieving a significant reduction in deforestation through social agreements and positioning the country as a leader in global climate diplomacy, culminating in the ratification of the Escazú Agreement. However, both terms have faced complex challenges, from persistent violence against environmental leaders to the difficulty of effective environmental governance, demonstrating that the path to sustainability remains a constantly evolving battlefield.

**Keywords:** Biodiversity; Deforestation; Energy Transition; Environmental Leaders; Escazú Agreement; Environmental Governance

## **Introducción**

En Colombia, las políticas ambientales son fundamentales para la prevención y mitigación de los impactos negativos en los ecosistemas y la sociedad, garantizando un desarrollo sostenible para la nación. Estas políticas no son solo un conjunto de normas, sino un escudo protector para la biodiversidad, una brújula que orienta el crecimiento del país y una promesa de un futuro más verde. Su propósito es abordar problemas como la deforestación, la contaminación del aire y del agua, y la sobreexplotación de los recursos, con el fin de sanar el daño causado por el desarrollo y fomentar una coexistencia armoniosa entre la naturaleza y la sociedad (Baltazar & Carvajal, 2023).

Desde la gestión urbana hasta la protección de redes ecológicas, Colombia ha implementado políticas clave para enfrentar desafíos específicos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). Sin embargo, la lucha ambiental es una carrera de fondo. La deforestación sigue siendo una amenaza crítica, especialmente en la Amazonía, destruyendo la biodiversidad y degradando el suelo (Ramírez, 2015). A esta batalla se suman retos monumentales como la transición energética, crucial para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y mitigar el cambio climático.

El camino hacia la sostenibilidad es un llamado a la acción colectiva. El gobierno de Gustavo Petro ha puesto el ambiente en el centro de su agenda, impulsando la transición energética y la gestión de acuerdos internacionales como el de Escazú y el de Kunming-Montreal, que buscan detener la pérdida de biodiversidad (World Wildlife Fund, 2023). Esto nos invita a reflexionar: ¿Cómo se puede, siendo ciudadanos y funcionarios, ser guardianes de los activos de nuestro entorno? La respuesta no está solo en las políticas, sino en cómo se participa en ellas, garantizando que el discurso se convierta en una realidad palpable.

En la dinámica del gobierno, la política pública es la herramienta maestra para moldear la sociedad y el medio ambiente. Como describe Müller (2000), una política no es un acto aislado, sino un "programa de acción" que, al aplicarse en un sector, genera un efecto dominó que transforma a otros. Para que esta estrategia sea efectiva, debe tener una ruta clara, objetivos definidos y una evaluación constante, un proceso que Parsons (2007) y Roth (2002) complementan, destacando la necesidad de un enfoque multidisciplinario que

integre la sociología, la economía y la administración, y que indague sobre las causas y consecuencias reales de la acción estatal.

Este marco teórico se materializa en la agenda ambiental de Colombia, específicamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, bajo un enfoque que prioriza el ordenamiento territorial alrededor del agua, el Ministerio de Defensa Nacional (2023) impulsa una estrategia conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía. Su misión es doble: por un lado, desarticular las redes criminales que se lucran de la deforestación y los recursos naturales, y por otro, restaurar los bosques y promover el desarrollo sostenible con un enfoque que respete los saberes de las comunidades nativas. La inteligencia militar se convierte en una pieza clave para dismantelar estas estructuras, todo en aras de cumplir con las metas de reducción de emisiones y conservación del ecosistema amazónico.

La defensa de la naturaleza no es solo un plan de gobierno, sino un derecho fundamental. Desde mediados del siglo XX, las constituciones de países como Colombia, Chile y Brasil han adoptado la protección ambiental como un pilar jurídico, elevándolo a la categoría de derecho humano indispensable, como lo señala Estupiñán (2016). En este contexto, la teoría del desarrollo sostenible, según Carrizosa (1998) y Maya (1994), se presenta como la brújula para un futuro que equilibra la calidad de vida con la conservación planetaria. El reto, como detalla Dourojeanni (2000), es lograr un crecimiento económico que sea constante y equitativo, asegurando una distribución justa de los recursos sin comprometer la sostenibilidad del medio ambiente para las futuras generaciones.

A lo largo de los años, Colombia ha tejido un complejo entramado de políticas ambientales, pero su efectividad es una historia de contrastes. Autores como Cortés Landázury & Aguilera Prado (2012) reflexionan sobre las confusiones conceptuales desde la formulación de las políticas en los años 70, mientras que Cossío & Hinestroza (2017) señalan que su gran debilidad radica en la etapa de evaluación y seguimiento, una "etapa en el olvido". En esta misma línea, Pinilla (2012) critica la desconexión entre la gestión ambiental de las empresas estatales y los lineamientos de la política ambiental general.

La falta de coordinación interinstitucional, un reto resaltado por Pérez (2020), agrava esta situación, mientras que Muñoz (2011) concluye que los análisis realizados a la política ambiental colombiana no encajan en marcos específicos, lo que dificulta una crítica

constructiva. Por si fuera poco, Barreto (2017) destaca que hay comunidades como la campesina del Valle del Río Cimitarra, que con sus propios modelos de autogobierno y conservación, demuestran la viabilidad de alternativas a la gestión gubernamental tradicional.

Mientras tanto, la deforestación avanza sin tregua. Ubaque (2022) nos alerta sobre una alarmante pérdida de más de un millón de hectáreas de bosques desde 2010, con un 42% de los cultivos de coca concentrados en zonas de reserva forestal, lo que representa una amenaza inminente para la biodiversidad y la seguridad del país. Esta crisis se entreteje con los análisis de Tobasura (2006), que critica cómo los planos de desarrollo de 1990-2006 estaban dominados por un modelo económico que priorizaba el mercado sobre la conservación. Sin embargo, no todo es pesimismo.

Autores como Montenegro (2022) proponen que el cambio de comportamiento de la sociedad puede ser impulsado por instrumentos económicos y tributarios que mitiguen los impactos ambientales, y Ortiz (2022) y Callejas et al. (2018) resaltan el papel clave de la educación ambiental en las instituciones de educación superior para fomentar una cultura de sostenibilidad que contribuya a la reducción del cambio climático, en sintonía con la Agenda 2030 y los ODS.

La sostenibilidad urbana también se enfrenta a sus propios retos. Andrade & Bermúdez (2010), tras analizar la gestión ambiental en las ciudades, identifican que enfoques parciales y centralistas impiden una implementación adecuada de las políticas. Este problema se refleja en el estudio de caso de Villavicencio realizado por Ortiz & Salatiel (2014), quienes encontraron que los municipios priorizaban los intereses económicos por encima de la legislación ambiental al elaborar sus Planes de Ordenamiento Territorial. Pese a estos desafíos, Brand (2005) propone que el medio ambiente cobra relevancia cuando se le dota de una representación social, lo cual, a través de la creación de espacios urbanos, puede motivar a la ciudadanía a colaborar en los procesos de conservación, generando una forma muy positiva sobre la gestión ambiental en las ciudades.

Finalmente, la llegada del posconflicto y el desarrollo sostenible han abierto nuevos caminos. Soto & Vieira (2018) exploran la relación entre la política ambiental y la Responsabilidad Social Empresarial en el escenario del posacuerdo, mientras que Vargas et

al. (2020) analizan cómo la protección de ecosistemas en el caso de los páramos puede generar prohibiciones extremas que, paradójicamente, obstaculizan un desarrollo sostenible equilibrado en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. En este contexto, un estudio comparativo de las políticas ambientales entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, a la luz de normativas como la Ley 1931 de 2018 y la Ley 99 de 1993, es fundamental para entender el rumbo actual del país en materia ambiental.

Todo lo anterior conlleva a formular la presente pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación existente entre las políticas medioambientales del gobierno de Iván Duque y las que se encuentran en ejecución durante el actual gobierno de Gustavo Petro?, dicha pregunta va a resolverse según el objetivo general de este trabajo, el cual es *Realizar un análisis a las políticas medioambientales del gobierno de Iván Duque (2018-2022) y su relación con las políticas propuestas por el actual gobierno de Gustavo Petro (2022-2026)*, asimismo, el mencionado objetivo estará precedido de tres objetivos específicos, que a su vez componen el cuerpo de este artículo. Estos son:

- Identificar las estrategias originadas de las políticas medioambientales del gobierno de Iván Duque y su resultado con relación a la protección del medio ambiente
- Examinar las políticas y medidas con respecto a la protección del medio ambiente implementadas por el gobierno de Gustavo Petro, y sus impactos y avances hasta el momento en el territorio colombiano.
- Elaborar una comparación entre las políticas medioambientales de ambos gobiernos, brindando recomendaciones para el periodo restante del actual gobierno en términos de conservación ambiental, seguridad ecológica y desarrollo sostenible.

## **Metodología**

La presente investigación se encuadra dentro del paradigma relativista utilizando un enfoque cualitativo, el cual le da valor a la subjetividad y las dinámicas propias de la realidad social, las cuales se entienden como una especie de constructo que parte de toda interacción social proveniente de los actores involucrados en el fenómeno objeto de estudio. Este tipo de enfoque metodológico conlleva a que el conocimiento se genera a través de procesos continuos de interacción entre el individuo que investiga y los fenómenos que

pretende descifrar, por lo tanto, este hecho permite al investigador percibir el contexto del fenómeno tal como lo viven los actores implicados en ello (Hernández Sampieri, 2018).

La forma en la que se desenvuelve el investigador, es profundizando de manera activa en dicho fenómeno, aislándose de referentes teóricos predispuestos que podrían impedir la libre interpretación de quien investiga o lleva a cabo la construcción del trabajo. En ese sentido, usar la inteligencia estratégica es considerada un instrumento clave para tratar la problemática de los crímenes ambientales, que dañan los ecosistemas y todo lo relacionado con la biodiversidad en Colombia.

Este trabajo también se centra en el constructivismo, teoría que postula que la adquisición de un determinado conocimiento no conlleva la interpretación de una realidad objetiva con exactitud, sino que es un constructo emergido de todos los elementos que convergen en un determinado fenómeno de estudio. Para este enfoque, quien investiga se vuelve parte del proceso de construcción del conocimiento, que se basa en la interacción con el entorno de estudio y el adaptarse a las realidades locales para obtener los datos más exactos para la elaboración del documento (Hernández Sampieri, 2018,).

De esta manera, el estudio comenzará con una revisión documental detallada para establecer un marco conceptual e histórico sólido que contextualice la importancia del medio ambiente como un activo estratégico nacional.

Para concluir, la integración de los hallazgos, permitirá la formulación de estrategias orientadas a resguardar los activos estratégicos ambientales, que a su vez impactará en el fortalecimiento del pleno ejercicio de las garantías fundamentales.

Este enfoque es multidisciplinario y no solo es crucial para la preservación de los activos estratégicos de la nación, sino también es vital para asegurar el bienestar y la seguridad de las generaciones presentes y futuras en Colombia.

## **Identificación de las estrategias originadas de las políticas medioambientales del gobierno de Iván Duque y su resultado con relación a la protección del medio ambiente**

El gobierno de Iván Duque (2018-2022) se propuso una audaz misión para proteger el patrimonio natural de Colombia, una nación con múltiples ecosistemas y especies vulnerables. Para ello, desplegó un arsenal de políticas como la Ley de Acción Climática (Ley 2169 de 2021), que se comprometía a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030, y el Pacto por la Sostenibilidad, para involucrar a todos los sectores productivos en la protección del agua, los páramos y la calidad del aire. Su visión buscaba un difícil equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible.

Para hacer frente a la deforestación, una de las mayores amenazas, se implementó un robusto marco legal y estratégico. Se creó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF) (Ley 1955 de 2019) y se estableció una hoja de ruta con el CONPES 4021 de 2020, que buscaba reducir la deforestación en un 30% para 2022 y alcanzar la deforestación neta en cero para 2030 (Rodríguez Timaná, 2021). Además, se promulgó la Ley 2111 de 2021 de delitos ambientales, que tipificó nuevas ofensas y sancionaba con hasta 15 años de cárcel la deforestación, dotando a las autoridades de herramientas jurídicas modernas (Alonso, 2022). Estas medidas dieron solidez a estrategias como la Campaña Artemisa, que logró recuperar más de 14.000 hectáreas de bosque (Ministerio de Defensa Nacional, 2022).

A pesar de este andamiaje institucional, el legado de Duque es agrídulce. Aunque se crearon políticas y leyes, la deforestación no solo no disminuyó, sino que se incrementó en un 5% respecto al gobierno anterior, cerrando con más de 700.000 hectáreas deforestadas. El gran error de la estrategia fue su enfoque militarista, que ignoró las causas profundas del problema: las economías ilícitas y las necesidades de las poblaciones que se ven forzadas a buscar subsistencia en los bosques (Caracol Radio, 2022).

En conclusión, la administración Duque dejó un marco legal sólido para la protección del medio ambiente, pero enfrentó una serie de desafíos críticos. La falta de financiación para la implementación de las políticas, una débil coordinación interinstitucional y la incapacidad de reducir de manera efectiva la deforestación empañaron los esfuerzos. Los logros en la formulación se vieron opacados por una ejecución deficiente, lo que generó críticas por no tomar medidas suficientes para proteger

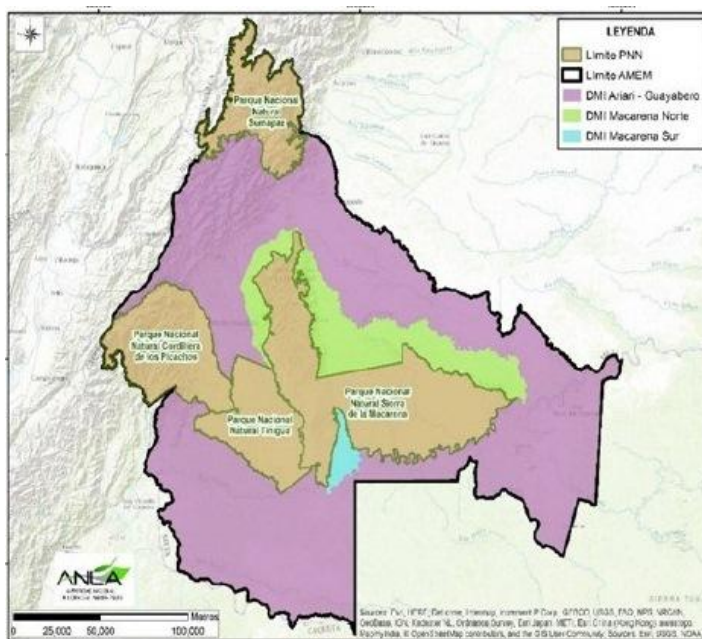
el medio ambiente y promover un desarrollo verdaderamente sostenible (Ramos Barón et al., 2022).

### **La Estrategia Artemisa**

Implementada para la época de 2019 y continuando su ejecución hasta 2022, la Estrategia Artemisa fue una política de tipo ambiental, enfocada a contrarrestar el avance de la deforestación en las áreas de parques nacionales a través de operativos militares y de control, especialmente en la amazonia colombiana, siendo sus departamentos de mayor impacto, el Guaviare, Caquetá y el Meta. Surgió como respuesta para resguardar las áreas naturales protegidas y detener la expansión de cultivos ilícitos en las zonas consideradas de alto valor ecológico. En cuanto a sus logros, se redujo el 20% de la deforestación en determinadas zonas, con algunos efectos temporales (IDEAM, 2022, p. 34). Por ejemplo en el Parque Nacional Chiribiquete, se logró la reducción de la deforestación en un 18% (Min Ambiente, 2022, p. 57).

**Figura 1**

*Mapa de los 4 parques naturales intervenidos por la Operación Artemisa*



*Nota:* en la referida imagen se encuentran el PNN Sumapaz, Los Picachos, Tinigua y Macarena. Tomado del Boletín Estratégico de la ESICI, por J. Sandoval, 2022

Los puntos más frecuentes de la ejecución de la Operación Artemisa fueron regiones afectadas por el conflicto armado y usadas para economías ilícitas, tales como la Serranía de Chiribiquete, la Sierra de la Macarena, el Resguardo Llanos de Yarí, y el Parque Nacional Natural La Paya, recuperándose 21.480 hectáreas de bosque, y reduciéndose las acciones vinculadas a la tenencia de tierras ilegales, la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos, y por ende, defendiendo los derechos de las comunidades residentes en estas zonas vulneradas (Escuela Superior de Guerra, 2022)

**Figura 2**  
Incendio en la Serranía del Chiribiquete, Enero de 2022.



*Nota:* tomado de Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), febrero 7 de 2022.

La operación Artemisa incluía no solamente operativos en campo, también la conformación de un comando de inteligencia enfocado a la problemática de la deforestación, en el cual, la información proveniente de diversas agencias, era esencial para la conducción de las operaciones. Fue así que durante 2019 – 2021 se ejecutaron un total de 17 operativos Artemisa en distintas reservas forestales de la región Amazónica, desplegándose en dichas áreas una cantidad de 22.300 efectivos militares, entre los que figuraban brigadas enfocadas a los delitos ambientales (Ministerio de Defensa Nacional, 2022).

La estrategia Artemisa se presentó como un coloso militar para proteger las joyas ecológicas de Colombia, desplegando a las fuerzas armadas en zonas críticas como la

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Serranía de Chiribiquete. Aunque inicialmente prometedora, recuperando cerca de 21.000 hectáreas de bosque y capturando a 113 individuos en 2019, la inversión de 3.400 millones de pesos no fue suficiente. La realidad fue que la deforestación se disparó, perdiéndose entre 171.000 y 174.000 hectáreas en los años siguientes. A gran escala, Artemisa apenas logró intervenir un 21% del terreno deforestado en la Sierra de la Macarena y un 13% en Tinigua. La Amazonía, por su parte, vio cómo su participación en la deforestación nacional escalaba del 62% al 70% (Tarazona & Parra de Moya, 2022).

El verdadero fracaso de Artemisa no fue la falta de fuerza, sino la miopía estratégica. Al no ofrecer alternativas económicas formales ni garantizar una presencia estatal continua, las áreas "recuperadas" fueron rápidamente reocupadas por actividades ilegales. La falta de seguridad post-operación incluso impidió que Parques Nacionales Naturales pudiera ejecutar programas de restauración, convirtiendo a la estrategia en una solución superficial que, lejos de sanar, terminó estimulando indirectamente la deforestación y dejando una cicatriz de 504.682 hectáreas en los bosques colombianos (Tarazona & Parra de Moya, 2022).

A pesar de que la estrategia Artemisa logró fortalecer la presencia estatal en zonas vulnerables e identificar a los culpables de la deforestación, su mayor controversia radica en los altos costos sociales y el fracaso de su enfoque. Al militarizar la conservación, la estrategia generó conflictos con las comunidades indígenas, provocando su desplazamiento sin ofrecerles alternativas económicas viables. Además, el operativo se centró en criminalizar a los campesinos, quienes carecen de los 4 millones de pesos necesarios para deforestar una hectárea, mientras los verdaderos responsables del negocio, que operan en las esferas más altas, quedaban impunes (Global Witness, 2022, p. 45; Ramos Barón et al., 2022).

### ***La Estrategia de Transición Energética***

Durante el gobierno de Duque, Colombia impulsó una ambiciosa transición energética con la Ley 1715 de 2014, ofreciendo incentivos como la exclusión del IVA y una reducción del 50% en el impuesto de renta por 15 años para quienes invirtieran en

energías renovables. Esta política, aunque no buscaba reducir la dependencia de los hidrocarburos, logró un aumento del 5% en la capacidad instalada y vio florecer proyectos clave en la Guajira y el Atlántico, como el proyecto solar de 100 MW que beneficia a más de 250.000 personas, o el parque eólico Guajira 1, que suministra energía a 33.295 hogares y evita 136 toneladas de emisiones de CO2 anualmente (CEDETRABAJO, 2022; Ministerio de Minas y Energía, 2021, p. 89; Ramos Barón et al., 2022).

Sin embargo, el camino de esta transición no estuvo libre de tormentas. El gobierno celebró el salto del 1% al 5% en la generación de energías renovables no convencionales, pero esta cifra incluía proyectos en fase de prueba, inflando la realidad. El enfoque privado de la estrategia generó preocupaciones sobre la privatización de los servicios públicos y el aumento de las tarifas, reflejándose en conflictos con comunidades locales, como en el Parque Eólico de la Guajira, donde 10 aerogeneradores de 78 metros de altura afectaron los territorios indígenas. En Santander, el proyecto Sebastosol, declarado de interés público, incluso permitió la expropiación de tierras, evidenciando un choque entre el desarrollo y los derechos de los ciudadanos (CEDETRABAJO, 2022; Preciado, 2022; PM Abogados, 2021).

**Figura 3**

Vista aérea del Parque eólico *Guajira 1*, ubicado en el corregimiento del Cabo de la Vela, entre el área desértica y del mar Caribe.



*Nota:* tomado de diario El colombiano, por A. Zapata, 22 de enero de 2022

A pesar de sus logros, la estrategia de Duque reveló profundas fallas estructurales. La falta de infraestructura para integrar nuevas fuentes energéticas y los retrasos en las

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

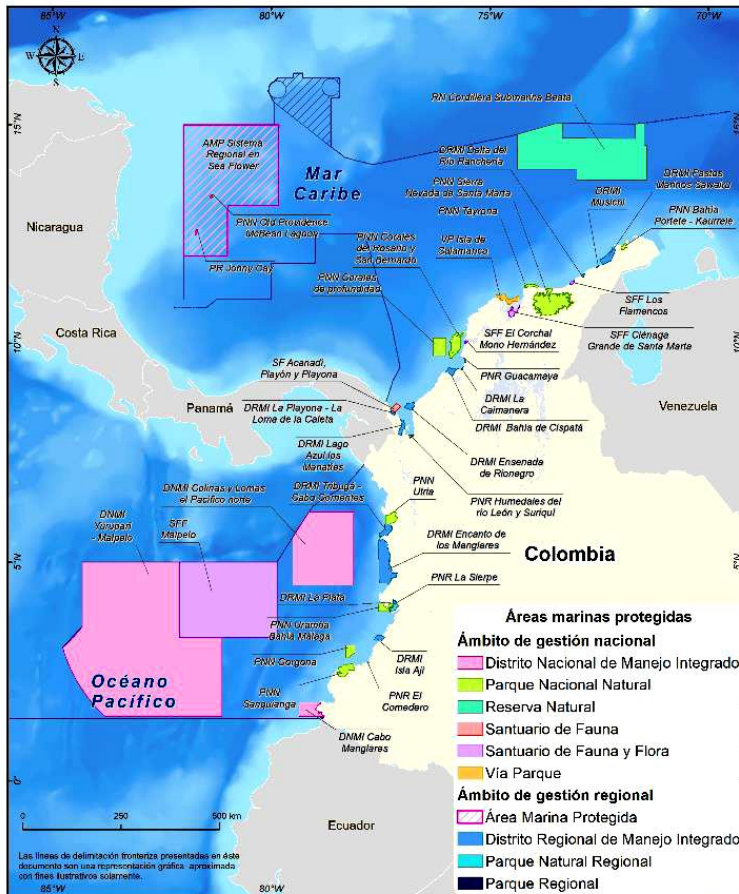
Bogotá D.C., Colombia

licencias ambientales obstaculizaron su progreso. Pero, quizás el mayor defecto fue su falta de visión a largo plazo, ya que no fomentó la investigación local. Los incentivos se inclinaron hacia los grandes proyectos con capital extranjero, mientras que las iniciativas de universidades y el SENA, de menor escala, quedaban excluidas. En resumen, aunque el país vio un aumento de 25 veces en la capacidad instalada para energías renovables, con 7 granjas solares y un parque eólico, el modelo priorizó la inversión extranjera sobre la innovación interna, dejando a la comunidad y a la investigación colombiana rezagadas (CEDETRABAJO, 2022; Ramos Barón et al., 2022).

### *Creación de Áreas Protegidas y la seguridad de los líderes ambientales*

Durante el gobierno de Iván Duque, la estrategia de ampliación de áreas protegidas se presentó como una iniciativa vital para la conservación, logrando añadir 2.5 millones de hectáreas y elevando la cobertura nacional en un 12%. Este esfuerzo, concentrado principalmente en el Amazonas y el Chocó, fomentó la creación de corredores biológicos y la protección de especies vulnerables, como lo demuestra la creación del Parque Nacional Serranía de Manacacías, un bastión de 200.000 hectáreas de sabana tropical. Sin embargo, la falta de financiación adecuada dejó a estas nuevas áreas sin los sistemas de administración y vigilancia necesarios, permitiendo su deterioro y revelando una brecha entre la ambición del plan y la capacidad de ejecución (IDEAM, 2023, p.79; WWF, 2023, p. 91; Min Ambiente, 2021, p. 102).

**Figura 4**  
Áreas marinas Protegidas que integran el SAMP de Colombia.



*Nota:* tomado del Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia, 2022. Serie de Publicaciones Periódicas No. 3. Santa Marta. 313 p.

A medida que se expandían las áreas protegidas, la violencia contra los líderes ambientales alcanzaba niveles alarmantes. Según Global Witness, Colombia se consolidó como el país más peligroso para los defensores de la tierra, con 154 asesinatos entre 2018 y 2020 y 65 de 227 asesinatos mundiales ocurridos en el país en 2021. Las cifras de Indepaz son igualmente sombrías, con 171 líderes ambientales asesinados en 2021 y otros 24 en 2022. Esta escalada de violencia, en gran parte vinculada a procesos de restitución de tierras y conflictos por el control de territorios, puso en evidencia la ineficacia de las estrategias militares y coyunturales de la administración para garantizar la seguridad en el territorio (Global Witness, 2022, p. 45; Ramos Barón et al., 2022; Democracia Abierta, 2022).

En este contexto de riesgo, el Acuerdo de Escazú se alzó como una herramienta crucial para proteger a quienes defienden el medio ambiente. Aunque fue firmado en 2019, su ratificación se vio frustrada por dilaciones en el Congreso, impulsadas por miembros del partido Centro Democrático. Esta parálisis política dejó a los líderes ambientales sin un mecanismo jurídico que protegiera sus vidas y su derecho a participar en las decisiones ambientales. La falta de acción gubernamental para abordar las causas profundas de la violencia, como los conflictos por la tierra, demostró que un simple acuerdo protocolario no es suficiente; se necesita una voluntad política real para que el discurso de protección se traduzca en una seguridad tangible y duradera para quienes luchan por la preservación de los ecosistemas (Ramos Barón et al., 2022; Democracia Abierta, 2022).

### **Examinar las políticas y medidas con respecto a la protección del medio ambiente implementadas por el gobierno de Gustavo Petro, y sus impactos y avances hasta el momento en el territorio Colombiano**

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 marcó un giro radical en la política ambiental de Colombia. Con el lema "Colombia, Potencia Mundial de la Vida", su gobierno elevó la protección del medio ambiente de un tema secundario a un pilar central del Plan Nacional de Desarrollo. Esta visión reconoce la megadiversidad del país, con la Amazonía y los páramos como sus joyas más preciadas, y busca transformar la riqueza natural en la base de un desarrollo justo y sostenible, en respuesta a la urgente crisis climática y de biodiversidad global (Rueda, 2022).

Sin embargo, el camino hacia esta transformación está lleno de obstáculos. Colombia, una nación megadiversa, se enfrenta a la presión constante de la deforestación, la minería ilegal y la contaminación, problemas que se han visto exacerbados por el posconflicto y las economías ilícitas. Ante este complejo escenario, Petro ha propuesto un cambio de paradigma: dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles, reordenar el territorio en torno al agua y detener la deforestación con un enfoque social que involucre a las comunidades y fortalezca la gobernanza ambiental (Earlham Institute, 2017; Vergara, 2024).

Aunque el gobierno ha desplegado iniciativas concretas, desde discursos en foros internacionales hasta acciones en el terreno, la implementación de estas ambiciosas políticas se ha topado con una realidad compleja: la necesidad de conciliar la protección ambiental con los intereses económicos, las realidades territoriales y la estabilidad social. Este desafío es crucial para entender los avances y los retos que la agenda de Petro seguirá enfrentando en su búsqueda de un futuro más verde y equitativo para el país (Vergara, 2024).

### **Políticas y Medidas Clave Implementadas**

El gobierno de Petro ha tejido una nueva visión ambiental para Colombia, colocando el agua en el centro de todo. Su estrategia de "Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua" propone un cambio de paradigma, donde ríos, páramos y manglares no son solo recursos, sino los ejes del desarrollo y la vida. Con iniciativas como los Consejos Territoriales del Agua y la restauración de cuencas, se busca garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental. Paralelamente, impulsa una transición energética justa para romper la dependencia de los combustibles fósiles, cerrando la puerta a nuevas exploraciones y apostando por las energías renovables, garantizando que las comunidades que dependen de la economía extractiva no queden desamparadas (Vergara, 2024; Cifuentes Quintero, 2024).

La lucha contra la deforestación se ha vuelto un campo de batalla prioritario, especialmente en la Amazonia. A diferencia de estrategias anteriores, el gobierno de Petro no solo ha militarizado la zona, sino que busca acuerdos sociales con las comunidades nativas para que se conviertan en los guardianes de los bosques. En el frente internacional, Colombia ha asumido un rol protagónico, siendo anfitriona de la COP16 de Biodiversidad en 2024, un evento que visibiliza su compromiso y busca movilizar recursos y cooperación global (Civil Right Defenders, 2024; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2023; United Nations Environment Programme, 2024).

Para fortalecer este andamiaje, el gobierno ha avanzado en la protección legal de la naturaleza, dándole su lugar a fuentes hídricas como el río Atrato para que sean reconocidos como sujetos de derechos. Ha ratificado el Acuerdo de Escazú para dar a la ciudadanía herramientas para la participación y la justicia ambiental, y ha creado el Fondo

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

para la Vida y la Biodiversidad con un capital semilla proyectado de billones de pesos para financiar proyectos de conservación. Estas medidas, junto con la intensificación de los operativos contra la minería ilegal y la adición de más de 1.1 millones de hectáreas de nuevas áreas protegidas, demuestran un esfuerzo estructural por proteger el capital natural de Colombia y consolidarla como una "Potencia Mundial de la Vida" (Romero, 2025; Gómez, 2023).

### ***Impactos y Avances hasta el Momento (Corte a mediados de 2025)***

Con la visión de convertir a Colombia en una "Potencia Mundial de la Vida", el gobierno de Gustavo Petro ha hecho de la agenda ambiental un pilar central, logrando avances significativos en casi tres años. Uno de sus mayores triunfos ha sido la notable reducción de la deforestación, con una caída del 33% en la Amazonía durante el primer trimestre de 2025, manteniendo la tendencia de 2023, que registró las cifras más bajas en años. Este logro se basa en una estrategia multidimensional que combina la presión militar en puntos críticos con acuerdos sociales, buscando empoderar a las comunidades para que se conviertan en guardianas del bosque, en lugar de criminales de la tala, y enmarcando esta lucha dentro de la política de "Paz Total" para reducir la influencia de grupos armados (López, 2025; El Tiempo, 2024).

A nivel global, el gobierno de Petro ha posicionado a Colombia como un actor clave en la diplomacia ambiental. El presidente ha utilizado foros internacionales para abogar por la justicia climática y el cambio de enfoque en la lucha contra las drogas. Como muestra de este compromiso, el gobierno impulsó la ratificación del Acuerdo de Escazú, un hito que fortalece los derechos de acceso a la información y a la justicia ambiental. Además, el país fue anfitrión de la COP16 de Biodiversidad en Cali, un triunfo diplomático que puso a Colombia en el centro de la atención mundial sobre la conservación y la biodiversidad, facilitando el diálogo y la movilización de recursos (Minambiente, 2024; Convention on biological diversity, 2024).

En el frente interno, la gestión ambiental se ha reforzado con medidas institucionales y territoriales. Se han añadido más de 1.1 millones de hectáreas a la red de áreas protegidas del país, consolidando las metas de conservación. Un avance crucial ha sido la creación del mencionado Fondo para la Vida y la Biodiversidad. A pesar de los

desafíos legislativos, también se han iniciado discusiones para reformar el Código de Minas, con la intención de integrar una visión ambiental y social que proteja los ecosistemas (Minambiente, 2024; Minambiente, 2023).

*Desafíos, Críticas y Aspectos Pendientes:*

A pesar de la audaz agenda de Petro, la realidad pone a prueba su ambicioso discurso. Organizaciones como Mongabay y Diálogo Chino señalan un preocupante desfase entre las 25 promesas ambientales de campaña y los logros reales, lo que genera dudas sobre la capacidad del gobierno para materializar sus planes. Este dilema se agudiza en la Transición Energética, donde la política de no otorgar nuevas licencias de exploración de hidrocarburos choca con la lentitud en el desarrollo de proyectos de energías renovables a gran escala, sembrando preocupaciones sobre la autosuficiencia energética y la estabilidad económica del país. Expertos y gremios abogan por una "transición a la colombiana" más gradual, que se adapte a la realidad fiscal y energética del país (Saavedra, 2025; Vergara, 2024).

La lucha contra las amenazas ambientales y la protección de los líderes es un frente de batalla constante y peligroso. A pesar de los operativos, la minería ilegal y la expansión de la frontera agrícola persisten, especialmente en regiones como Chocó, Antioquia y Bolívar, donde se entrelazan con la violencia de grupos armados. La implementación de la ley de plásticos de un solo uso también se ve obstaculizada por la falta de recursos, especialmente en zonas rurales. Además, aunque el Acuerdo de Escazú está ratificado, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales, lo que demuestra la dificultad de desarticular las redes criminales que los amenazan y la incapacidad de garantizar una protección efectiva en el territorio (Civil Right Defenders, 2024).

El mayor desafío del gobierno de Petro radica en la coordinación y coherencia. Su ambiciosa agenda ambiental, aunque transformadora, enfrenta una fragmentación interna, con la dificultad de articular eficazmente las políticas del sector ambiente con otros sectores clave como agricultura, minas y defensa. Esta falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales pone en riesgo el éxito de iniciativas cruciales, como el ordenamiento alrededor del agua o la lucha contra la deforestación. En síntesis, aunque la

voluntad política es fuerte, la verdadera prueba para que Colombia se convierta en una "Potencia Mundial de la Vida" será la capacidad del gobierno para superar estos desafíos estructurales y lograr una implementación más rápida y cohesionada de sus políticas (Berti, 2024).

### **Comparación entre las políticas medioambientales de ambos gobiernos, brindando recomendaciones para el periodo restante del actual gobierno en términos de conservación ambiental, seguridad ecológica y desarrollo sostenible**

La gestión ambiental en Colombia ha sido un campo de batalla y de ambiciones divergentes entre las administraciones recientes de Iván Duque Márquez (2018-2022) y Gustavo Petro Urrego (2022-2026). Mientras que el gobierno de Duque adoptó un enfoque de "Crecimiento Verde" y "Economía Naranja", buscando la conciliación entre el desarrollo económico y la sostenibilidad bajo una lógica de mercado, la administración de Petro ha propuesto una transformación más radical, posicionando la agenda ambiental como el eje central de su política exterior e interior bajo el lema de "Potencia Mundial de la Vida", vinculándola directamente con la paz y la justicia social.

Esta comparación no solo revela diferencias en las prioridades discursivas, sino también en las estrategias de implementación y los resultados obtenidos en temas críticos como la deforestación, la transición energética y la protección de la biodiversidad. El gobierno Duque logró avances notables en la expansión de áreas marinas protegidas (alcanzando el 33% de la superficie marina) y el impulso de las energías renovables no convencionales (multiplicando por 100 la capacidad instalada). Sin embargo, su cuatrienio fue marcado por un aumento histórico de la deforestación (más de 700.000 hectáreas deforestadas entre 2018 y 2021), lo que generó críticas sobre la efectividad de sus estrategias de control territorial y la falta de impacto real de su discurso "verde".

Por su parte, el gobierno Petro ha centrado su agenda en la descarbonización de la economía y la lucha frontal contra la deforestación, especialmente en la Amazonía, a través de una estrategia que busca involucrar activamente a las comunidades y vincular la conservación con la "Paz Total". Los resultados preliminares de 2023, con una reducción

histórica de la deforestación (36% según el Ministerio de Ambiente), sugieren un cambio de tendencia.

Este diagnóstico coyuntural es crucial para entender los desafíos actuales del país en materia ambiental, la persistencia de problemas estructurales y la necesidad de un enfoque equilibrado que integre la ambición climática con la pragmática gestión de los recursos y las realidades socioeconómicas del territorio.

### **Análisis de las Políticas Ambientales en cada Gobierno**

La política ambiental colombiana de la última década, bajo los gobiernos de Iván Duque Márquez (2018-2022) y Gustavo Petro Urrego (2022-2026), ha sido un claro reflejo de la tensión global entre la necesidad de desarrollo económico y la urgencia de la conservación y la acción climática. Sus enfoques, marcadamente distintos, han generado resultados contrastantes y definen el rumbo ambiental actual del país.

El gobierno de Iván Duque se enmarcó en una narrativa de "crecimiento verde" y "economía naranja", buscando armonizar la expansión económica con la sostenibilidad a través de la inversión privada y la tecnología. En sus logros, hubo un impulso significativo a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) , con la capacidad instalada multiplicándose por más de 100 veces pasando de menos de 50 MW a más de 880 MW operativos al final de su mandato, y con proyectos contratados que superaban los 4.000 MW (Redacción Semana, 2022). Esto fue posible gracias a la Ley 2099 de 2021.

Asimismo, se destacó la expansión de Áreas Marinas Protegidas (AMP) , logrando que Colombia declarara el 33% de sus áreas marinas bajo protección para 2022 , ocho años antes de la meta global del 30% para 2030, lo que representó un aumento de 12.454.011 hectáreas a 30.132.769 hectáreas protegidas (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2022).

Además, se promulgó la Ley 2232 de 2022 de Plásticos de un Solo Uso y la Ley 2169 de 2021 de Acción Climática, que desarrollaron ambiciosas metas de reducción del 51% de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 2030 y la neutralidad de carbono al 2050 (Departamento Nacional de Planeación, 2024). En cuanto a la reforestación, se sembraron 141.129.564 árboles, lo que significó un 78.4% de cumplimiento de la meta propuesta de 180 millones (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).

Sin embargo, su mayor falencia fue el aumento histórico de la deforestación, registrando 701.841 hectáreas deforestadas entre 2018 y 2021 (IDEAM), un incremento del 5% respecto al cuatrienio anterior (Garzón & Castrillón, 2022). En 2021, la cifra fue de 174.103 hectáreas, solo un 1.5% menos que en 2020 (Lizarazo, 2022).

A pesar de iniciativas como la "Campaña Artemisa", el control territorial fue débil y no logró atacar de fondo las causas estructurales de la deforestación como la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos, evidenciando una brecha entre su ambiciosa retórica internacional y la efectividad de sus acciones en el terreno (Tarazona & Parra De Moya, 2023).

Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro ha posicionado la agenda ambiental como el pilar central de su política bajo el lema "potencia mundial de la vida", buscando una transformación estructural de la economía y la sociedad, y vinculando directamente el ambiente con la paz y la justicia social. Sus principales fortalezas radican en la prioridad absoluta al clima y una ambiciosa transición energética justa, elevando la descarbonización a tema de seguridad nacional e internacional.

El gobierno Petro ha establecido un fuerte vínculo entre la "Paz Total" y el ambiente, reconociendo la relación entre la deforestación y los conflictos armados. El logro más destacado es la reducción histórica de la deforestación en 2023, que disminuyó en un 36% , pasando de 123.517 hectáreas en 2022 a 79.256 hectáreas en 2023 (IDEAM, 2024), con una reducción del 38% en la Amazonía , la cifra más baja en 23 años, superando la meta del 20% del Plan Nacional de Desarrollo (MinAmbiente, 2024).

Además, Petro ha puesto un énfasis significativo en la Amazonía y las comunidades, promoviendo pagos por servicios ambientales, y ha asumido un liderazgo internacional proactivo en foros globales. El presupuesto de inversión para el sector ambiente aumentó un 3% en 2023, ascendiendo a \$1,4 billones de COP (MinAmbiente, 2022).

No obstante, Petro enfrenta grandes falencias y riesgos, especialmente en la viabilidad y el ritmo de la transición energética. La propuesta de detener la exploración de petróleo y gas genera preocupación sobre la seguridad energética y económica del país, dada la dependencia de estos ingresos. Las reservas probadas de gas se han reducido a 6,1

años y de petróleo a 7,2 años, y la no firma de nuevos contratos de exploración podría agudizar la crisis energética futura (Correa, 2025).

La estrategia para el desmantelamiento de economías ilegales más allá del diálogo aún genera interrogantes operativos, y un análisis de Infobae en abril de 2024 indicó que solo se habían cumplido 8 de las 25 promesas ambientales de campaña, lo que sugiere desafíos en la ejecución. Existe también un riesgo de fragmentación en la gestión ambiental por la falta de coordinación interinstitucional (Lancheros, 2024).

En equilibrio, mientras el gobierno de Iván Duque sentó bases en la legislación climática y avanzó en energías renovables, dejó una profunda cicatrización en la deforestación. Por su parte, el gobierno de Gustavo Petro ha propuesto una transformación ambiental más profunda y un liderazgo internacional ambicioso, logrando una reducción significativa inicial de la deforestación.

Sin embargo, Petro enfrenta el inmenso desafío de implementar una transición económica sostenible que no comprometa la seguridad energética, y de consolidar estrategias efectivas contra las economías ilegales que históricamente han impulsado la degradación ambiental en Colombia. La coherencia entre el discurso ambicioso y la capacidad real de ejecución en el territorio será fundamental para el futuro ambiental del país.

La gestión ambiental en Colombia, bajo los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, refleja un debate global de visiones. Por un lado, la política de Duque, orientada a la "economía naranja" y el "crecimiento verde", encuentra eco en la teoría de la ecología política de James O'Connor (1998), el cual argumenta que las soluciones a las crisis ambientales pueden surgir del mercado y la tecnología. En este sentido, la apuesta de Duque por incentivos fiscales para las energías renovables y la expansión de las áreas marinas protegidas se alinean perfectamente con la idea de que el capitalismo puede gestionar y conservar los activos naturales.

En contraposición, el enfoque de Gustavo Petro, centrado en la justicia ambiental, resuena con la teoría de Robert Bullard (1990), quien sostiene que las cargas ambientales afectan de manera desproporcionada a los más vulnerables. Por ello, la agenda de Petro, que conecta la protección ambiental con la "Paz Total" y el empoderamiento de las

comunidades indígenas y campesinas, busca corregir estas desigualdades. La ratificación del Acuerdo de Escazú y los pagos por servicios ambientales en la Amazonía son ejemplos de cómo la política de Petro busca que las comunidades sean protagonistas activas de la solución, y no simplemente víctimas de la degradación.

No obstante, la visión de Duque, a pesar de su retórica verde, puede ser vista desde la óptica de Alberto Acosta (2016) como una forma de neoextractivismo. Acosta argumenta que el "crecimiento verde" no rompe la dependencia de la economía en la extracción de recursos, y el fracaso de Duque en controlar la deforestación, con un aumento del 5%, evidenciaría que su enfoque no atacó las causas estructurales del problema. Por otro lado, la ambiciosa transición energética de Petro, que busca detener la exploración de hidrocarburos, podría ser criticada por el realismo político de Hans Morgenthau (1948). Desde esta perspectiva, una medida tan radical podría comprometer la seguridad energética y la estabilidad fiscal de Colombia, debilitando al Estado y su capacidad de acción.

A pesar de sus diferencias, ambos gobiernos enfrentan una crítica unificada a través de la teoría de la "tragedia de los comunes" de Garrett Hardin (1968). Este autor sostiene que los recursos compartidos tienden a ser sobreexplotados si no hay un control estricto. Bajo esta luz, las políticas de Duque, enfocadas en el mercado, y las de Petro, con su énfasis en la gestión comunitaria, podrían no ser suficientes. Las cifras de deforestación, ya sea el aumento con Duque o la reducción inicial con Petro, demuestran que, sin una intervención firme que regule la explotación individual, el resultado inevitable es la continua degradación de los recursos naturales del país.

### ***Similitudes y Diferencias Clave***

Entre las similitudes se encuentran el compromiso con metas internacionales, puesto que ambos gobiernos se han alineado con las metas globales de reducción de emisiones (NDC del 51% a 2030, carbono neutralidad a 2050) y la protección de la biodiversidad. Asimismo en las distintas de los gobiernos de Duque y Petro, estos han impulsado la adopción de energías renovables, aunque con diferentes urgencias y visiones sobre el papel de los combustibles fósiles en la transición. Igualmente, durante la época de Duque hasta el actual gobierno Petro, sus gobiernos han declarado la Amazonía como un ecosistema estratégico y han buscado acciones para su conservación, aunque con enfoques distintos en

## Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

la implementación y la relación con las comunidades, proponiendo o implementando mecanismos como el pago por servicios ambientales.

En lo relativo a sus diferencias, se encuentra el siguiente cuadro comparativo:

### Diferencias:

Característica	Gobierno Iván Duque	Gobierno Gustavo Petro
<b>Filosofía Dominante</b>	"Crecimiento Verde", "Economía Naranja", mercado y tecnología.	"Potencia Mundial de la Vida", "Paz Total", justicia ambiental y transformación estructural.
<b>Prioridad Central</b>	Importante, pero un eje más entre varios objetivos de desarrollo.	Eje central y transversal de toda la política pública (nacional e internacional).
<b>Deforestación</b>	Aumento sostenido (701.841 ha en 4 años); estrategia militarizada (Artemisa).	Reducción significativa (36% en 2023); enfoque en diálogo comunitario, "Paz Total", y acción integral.
<b>Transición Energética</b>	Fomento de ERNC, pero sin prisa en abandonar combustibles fósiles; énfasis en grandes proyectos.	Abandono gradual de combustibles fósiles, alta prioridad y urgencia; énfasis en la "justicia energética".
<b>Relación Paz-Ambiente</b>	Indirecta; seguridad vs. deforestación.	Directa y explícita; la paz es un prerrequisito para la conservación y viceversa.
<b>Liderazgo Internacional</b>	Participación activa, cumplimiento de compromisos.	Liderazgo muy proactivo y propositivo de nuevas ideas, promoción de cambio de sistema global.
<b>Enfoque Socio-Ambiental</b>	Más en incentivos económicos, menos en conflictos de uso.	Más en justicia social y ambiental, participación comunitaria.

*Fuente:* autoría propia

A pesar de los cambios de enfoque y los avances, Colombia enfrenta problemáticas ambientales estructurales que trascienden los ciclos de gobierno, entre ellas se encuentran: afectaciones persistentes de actividades legales y clandestinas de explotación de recursos naturales sobre las áreas forestales vulnerables y ecosistemas estratégicos, debilidad institucional y de control territorial en zonas remotas y de conflicto, conflictos socioambientales relacionados a proyectos de desarrollo con comunidades locales y étnicas, dependencia económica de combustibles fósiles, vulnerabilidad al cambio climático y falta de coordinación intersectorial sostenible.

---

<sup>1</sup> Es un concepto que busca la equidad en el sistema energético, abarcando todas sus etapas, desde la producción y el transporte hasta el consumo. Va más allá de la simple transición hacia fuentes renovables; se enfoca en cómo se distribuyen los beneficios y las cargas de este cambio (Rueda, 2018).

*Recomendaciones para el Periodo Restante del Actual Gobierno (Gustavo Petro Urrego)*

Para blindar la joya ambiental de Colombia, es crucial que el gobierno de Petro acelere sus estrategias de manera integral. La lucha contra la deforestación debe dejar de ser una batalla aislada para convertirse en una operación conjunta, donde la Fuerza Pública, la Fiscalía y las autoridades ambientales dismantelen las complejas redes criminales detrás de la minería ilegal y el acaparamiento de tierras. Pero no basta con la fuerza; la sostenibilidad debe ser el incentivo: hay que fortalecer las economías forestales y los proyectos agroecológicos con las comunidades locales, mientras se mantiene un monitoreo constante de la deforestación para asegurar la transparencia y el éxito a largo plazo.

El reloj de la transición energética corre, y el gobierno debe trazar una hoja de ruta clara, prudente y financiada. Es imperativo comunicar hitos y mecanismos que aseguren la seguridad energética sin comprometer el futuro. Los ingresos del petróleo y gas, lejos de ser un ancla, deben convertirse en el combustible para financiar directamente esta transición y compensar a las regiones afectadas, diversificando los proyectos para que las comunidades rurales y urbanas de difícil acceso también sean parte de esta revolución energética. La transición debe ser justa y abarcar a todos.

Finalmente, la gobernanza ambiental necesita una inyección de poder y coordinación. Es vital dotar de presupuesto y capacitación a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para que puedan ejercer su control territorial con eficacia. Las políticas nacionales deben traducirse en acciones concretas a nivel departamental y municipal, con la participación activa de las comunidades. Solo con hechos contundentes, como la reducción de la deforestación y el avance real en la transición energética, el liderazgo internacional de Colombia ganará la credibilidad necesaria para movilizar los recursos financieros globales y proteger la Amazonía, convirtiendo su discurso en una realidad palpable.

## **Conclusiones**

En la encrucijada del medio ambiente, Colombia ha navegado entre dos visiones distintas con los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. La administración de Duque se vistió de verde con metas ambiciosas, impulsando la Ley de Acción Climática y sembrando millones de árboles como estandarte de su política. Avanzó con decisión en la transición hacia energías limpias, como la solar y la eólica, y se comprometió con la protección de una

tercera parte del territorio nacional. Sin embargo, su brillante fachada se vio opacada por la sombra de la deforestación, un fantasma que persiguió su gobierno, dejando a la Amazonía más vulnerable que nunca.

Con la llegada de Gustavo Petro, el timón de la política ambiental giró hacia un rumbo radical. El presidente propone un viaje de descarbonización profunda, rompiendo con la brújula extractivista tradicional al plantear el fin de la exploración de nuevos contratos de hidrocarburos. Su faro apunta a la lucha contra la deforestación, un pilar de su gobierno que busca apagar con pagos por servicios ambientales a las comunidades locales, otorgándoles el poder de ser los guardianes del bosque. Pero el viaje no es fácil: se enfrenta a un mar de desafíos, desde la oposición política y económica, hasta la compleja realidad de un conflicto armado que todavía controla vastas zonas del país.

A pesar de sus diferencias, ambos gobiernos reconocieron que el reloj del clima avanza sin pausa. La principal brecha entre sus administraciones no es solo la velocidad de la transición, sino la dirección: mientras Duque construyó un puente hacia un futuro con energías limpias, sin cortar los lazos con los hidrocarburos, Petro aspira a volar sobre el pasado extractivista para aterrizar en un nuevo modelo post-extractivista. La deforestación sigue siendo un dragón que ambos han intentado domar. Si bien Duque sentó las bases para el combate climático, Petro busca una victoria sistémica, apostando por una transformación que entrelaza la protección ambiental con la justicia social, creando una estrategia más profunda y ambiciosa.

## **Referencias**

- Acosta, A. (2016). Extractivismo, neoextractivismo y postextractivismo. Debates y desafíos de la transición. Editorial Friedrich Ebert Stiftung (FES) y Abya-Yala.
- Alonso, J. 4 de julio de 2022. Colombia: el legado medioambiental de Iván Duque. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.dw.com/es/colombia-el-legado-medioambiental-de-iv%C3%A1n-duque-entre-luces-y-sombras/a-62358751>
- Andrade, P & Bermúdez, D. 2010. La sostenibilidad ambiental urbana en Colombia. Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 17, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp.

- 73-93. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.  
<https://www.redalyc.org/pdf/748/74816991004.pdf>
- Baltazar, J. & Carvajal, A. (2023). Estado de arte de las políticas públicas ambientales en el plan de desarrollo 2020 - 2023, en Santiago de Cali. Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho. En línea. Disponible en:  
<https://repositorio.uniajc.edu.co/server/api/core/bitstreams/2f7d5c1e-05bf-4794-bad2-882fdbd35dce/content>
- Barreto, J. 2017. Políticas públicas ambientales de carácter endógeno y gobierno de los bienes comunes en la zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra Nuevo Derecho, vol. 13, núm. 21, pp. 177-196 Institución Universitaria de Envigado. <https://www.redalyc.org/pdf/6697/669770733007.pdf>
- Berti, L. 21 de Oct de 2024. Deforestation plunges but environmental threats remain as Colombia hosts COP16. Mongabay. Artículo en línea. Disponible en:  
<https://news.mongabay.com/2024/10/deforestation-plunges-but-environmental-threats-remain-as-colombia-hosts-cop16/>
- Brand, P. 2005. Estrategias ambientales, legitimación gubernamental y regulación social: exploraciones en cuatro ciudades colombianas Economía, Sociedad y Territorio, vol. V, núm. 19, pp. 499-534.  
<https://www.redalyc.org/pdf/111/11101903.pdf>
- Bullard, R. D. (1990). *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality*. Westview Press.
- Callejas, M., Sáenz, O., Plata, Á., Holguín, M., & Mora, W. (2018). EL COMPROMISO AMBIENTAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EM COLOMBIA. *Praxis & Saber*, 9(21), 197-220. Retrieved January 23, 2025, from [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2216-01592018000300197&lng=en&tlng=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-01592018000300197&lng=en&tlng=es).
- Caracol Radio. 07/08/2022 . ¿Cómo quedó el sector ambiental luego de la presidencia de Iván Duque?. Artículo en línea. Disponible en:  
[https://caracol.com.co/radio/2022/08/07/nacional/1659869841\\_027975.html](https://caracol.com.co/radio/2022/08/07/nacional/1659869841_027975.html)

- Carrizosa, J. 1998. Construcción de la Teoría de la Sostenibilidad. En Misión Rural, Transición, Convivencia y Sostenibilidad. Santa Fe de Bogotá.
- CEDETRABAJO. 2022. La política de transición energética de duque: mucho para el discurso, poco por el ambiente. Apunte económico No. 29. [/https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2022/03/APUNTE-ECONOMICO-29-.pdf](https://cedetrabajo.org/wp-content/uploads/2022/03/APUNTE-ECONOMICO-29-.pdf)
- Civil Right Defenders. 13 de September de 2024. Colombia: The deadliest country for environmental defenders. <https://crd.org/2024/09/13/colombia-the-deadliest-country-for-environmental-defenders/#:~:text=%E2%80%9DIt%20is%20deeply%20concerning%20that,places%20in%20the%20world%20for>
- CORREA, M. 27 de mayo de 2025. Reservas de petróleo llegaron a 7,2 años en 2024 y se repuso 105% de la producción. <https://www.larepublica.co/economia/reservas-de-petroleo-llegaron-a-7-2-anos-en-2024-y-se-repuso-105-de-la-produccion-4143404#:~:text=Reservas%20de%20gas%20natural%20siguen,participaci%C3%B3n%20estatal%22%20en%20el%20sector>
- Cortés, R., & Aguilera, M. (2012). “Política ambiental en Colombia entre la formulación y la implementación”. *Criterios*, 5(1), 111–128. <https://doi.org/10.21500/20115733.1970>
- Cossío, F., & Hinestroza, L. (2017). “La evaluación y seguimiento de las políticas ambientales: una etapa en el olvido”. *ADVOCATUS*, 2(29). <https://doi.org/10.18041/0124-0102/advocatus.29.1671>
- Democracia Abierta. 10 de junio de 2022. El arresto de Iván Duque y el legado ambiental de su gobierno. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.opendemocracy.net/es/arresto-ivan-duque-legado-ambiental-gobierno/>
- Departamento Nacional de Planeación. Diciembre 05 de 2024. +Clima: una herramienta de transparencia para la acción climática en Colombia.

[https://sinergia.dnp.gov.co/Prensa\\_/Noticias/Paginas/-Clima-una-herramienta-de-transparencia-para-la-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica-en-Colombia.aspx](https://sinergia.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/-Clima-una-herramienta-de-transparencia-para-la-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica-en-Colombia.aspx)

Dourojeanni, A. 2000. Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable. CEPAL. División de Recursos Naturales e Infraestructura. Serie Manuales, No. 10. Santiago de Chile, Chile

Earlham Institute. April 18 de 2017. Keeping Colombia megadiverse. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.earlham.ac.uk/articles/keeping-colombia-megadiverse#:~:text=Yet%2C%20closely%20following%20Brazil%2C%20Colombia,Photo%3A%20Felipe%20Villegas.>

Escuela Superior de Guerra. 1 de noviembre de 2022. Boletín Maestría en seguridad y defensa nacionales. <https://esdegue.edu.co/sites/default/files/2022-11/Boletin-01-de-Noviembre.pdf>

Estupiñan, R. (2016). Desafíos y respuestas transnacionales frente a los crímenes ambientales. Revista de Direito Internacional (Brazilian Journal of International Law, v. 13, (3),30-48. <http://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r36652.pdf>

Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), febrero 7 de 2022. Nueva operación militar en el PNN Chiribiquete para enfrentar deforestación. Artículo en línea. Disponible en: <https://fcds.org.co/nueva-operacion-militar-en-el-pnn-chiribiquete-para-enfrentar-deforestacion/>

García, L. 2003. Teoría del desarrollo sostenible y legislación ambiental colombiana, una reflexión, cultural. Revista de Derecho, núm. 20, diciembre, 2003, pp. 198-215. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/851/85102008.pdf>

Garzón, C. & Castrillón, E. Julio 18 de 2022. AUNQUE LA DEFORESTACIÓN AUMENTÓ, DUQUE INTERPRETÓ LAS CIFRAS A SU FAVOR. <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/aunque-la-deforestacion-aumento-duque-interpreto-las-cifras-a-su-favor/>

Gómez, L. 18 Oct, 2023. Petro firmó decreto que reglamenta el fondo para la gestión ambiental del país. Infobae. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2023/10/18/petro-firmo-decreto-que->

- reglamenta-el-fondo-para-la-gestion-ambiental-del-pais/#:~:text=Con%20la%20firma%20el%20Decreto,Sistema%20Nacional%20Ambiental%2C%20que%20permitir%C3%A1
- Guardela, L. & Barrios, I. 2006. Colombia: ¿En la vía del desarrollo sostenible? Revista de Derecho, núm. 26, pp. 110-136 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/851/85102606.pdf>
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243-1248.
- Hernández, R. & Mendoza, C (2018). Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, Ciudad de México, México: Editorial. Mc Graw Hill Education
- INVEMAR. 2023. Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia, 2022. Serie de Publicaciones Periódicas No. 3. Santa Marta. 313 p. [https://www.researchgate.net/publication/373159054\\_Informe\\_del\\_estado\\_de\\_los\\_ambientes\\_y\\_recursos\\_marinos\\_y\\_costeros\\_de\\_Colombia\\_2022/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Ii9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoieX2RpbmVjdCJ9fQ](https://www.researchgate.net/publication/373159054_Informe_del_estado_de_los_ambientes_y_recursos_marinos_y_costeros_de_Colombia_2022/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6Ii9kaXJlY3QiLCJwYWdlIjoieX2RpbmVjdCJ9fQ)
- Lancheros, K. 04 Abr, 2024. Petro en el ojo de huracán: revelan que solo ha cumplido ocho de las 25 promesas ambientales que hizo en campaña. <https://www.infobae.com/colombia/2024/04/04/petro-en-el-ojo-de-huracan-revelan-que-solo-ha-cumplido-ocho-de-las-25-promesas-ambientales-que-hizo-en-campana/>
- Lizarazo, M. 15 julio 2022. La deforestación en Colombia sigue aumentando. ¿Qué errores se están repitiendo?. El Espectador. <https://infoamazonia.org/es/2022/07/15/deforestacion-aumento-colombia-2021/>
- Maya, A. 1994. Desarrollo Sustentable o Cambio Cultural. En Siglo XXI Memorias del Seminario Internacional sobre Desarrollo Sostenible, torno 1, p. 208- 213. Santa Fe de Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diciembre de 2021. Informe de seguimiento de políticas públicas ambientales corte 2021 -1. Documento en

- linea. Disponible en: <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Políticas-Ambientales-corte-2021-1-V1.pdf>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Julio 8, 2024. Reducción histórica de la deforestación en la Amazonía colombiana. <https://www.minambiente.gov.co/reduccion-historica-de-la-deforestacion-en-la-amazonia-colombiana/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Octubre 12 de 2021. ¡Superamos la meta en la Gran Sembratón! Con el aporte de más de 125 aliados plantamos más de 7,2 millones de árboles en todo el país. <https://www.minambiente.gov.co/superamos-la-meta-en-la-gran-sembraton-con-el-aporte-de-mas-de-125-aliados-plantamos-mas-de-72-millones-de-arboles-en-todo-el-pais/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Octubre 19, 2022. Presupuesto de inversión de sector ambiente aumenta 3% y asciende a \$1,4 billones para 2023. <https://www.minambiente.gov.co/presupuesto-de-inversion-de-sector-ambiente-aumenta-3-y-asciende-a-14-billones-para-2023/#:~:text=La%20ministra%20de%20Ambiente%20y,%241%2C4%20billones%20en%202023>
- Ministerio de Defensa Nacional. (2022). Artemisa: En defensa del medio ambiente: 2022. *Documentos Institucionales*. <https://doi.org/10.18359/docinst.6281>
- Ministerio de Defensa Nacional. (2022). Artemisa: En defensa del medio ambiente: 2022. *Documentos Institucionales*. <https://doi.org/10.18359/docinst.6281>
- Ministerio de Defensa Nacional. 2023. Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana. Garantías para la vida y la paz 2022-2026
- Ministerio de Minas y Energía. 2021. Transición energética: un legado para el presente y el futuro de Colombia. Tomado de: <https://www.minenergia.gov.co/libro-transicion-energetica>
- Montenegro, E. 2022. “LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA Y EL CAMBIO SOCIAL PARA EL CUIDADO SOSTENIBLE DEL MEDIO

- AMBIENTE. (2022)”. KAIRÓS, Revista De Ciencias económicas, jurídicas Y Administrativas, 5(9), 28-47. <https://doi.org/10.37135/kai.03.09.02>
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Muller, P. 2000. *Las Políticas Públicas*. ( J-F. Jolly & C. Salazar Vargas, Trans). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Muñoz, G. A. (2011). “ANÁLISIS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL COLOMBIANA EN LA DÉCADA 2000-2010”. *Semestre Económico*, 14(30), 121-134. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0120-63462011000300007&lng=en&tlng=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462011000300007&lng=en&tlng=es).
- Noticias Caracol. 1 de Agosto, 2022. ¿Qué hizo el gobierno de Iván Duque para proteger el medio ambiente?. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.noticiascaracol.com/colombia/que-hizo-el-gobierno-de-ivan-duque-para-proteger-el-medio-ambiente-rg10>
- O'Connor, J. (1998). *Natural Causes: Essays in Ecological Marxism*. Guilford Press.
- Ortiz, M. & Salatiel, J. 2014. Aplicación de la legislación ambiental y territorial en municipios capitales: Estudio de caso Villavicencio (Colombia) Orinoquia, vol. 18, núm. 2, pp. 130-148 Universidad de Los Llanos Meta, Colombia. [https://www.redalyc.org/pdf/896/Resumenes/Resumen\\_89640734011\\_1.pdf](https://www.redalyc.org/pdf/896/Resumenes/Resumen_89640734011_1.pdf)
- Ortiz, M. J. (2022). Alcance de la política de educación ambiental colombiana frente a la Agenda 2030. *Educación Y Educadores*, 24(3), e2434. <https://doi.org/10.5294/edu.2021.24.3.4>
- Parques Nacionales Naturales de Colombia. 28 de junio de 2022. Ocho años antes de lo acordado, Colombia superó meta del 30 % de áreas marinas protegidas. <https://old.parquesnacionales.gov.co/porta1/es/ocho-anos-antes-de-lo-acordado-colombia-supero-meta-del-30-de-areas-marinas-protegidas/>
- Parsons, W. 2007. *Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*. México: FLACSO, Sede Académica de México
- Pereira, Y.; Escorcía M. 2014. Ética ambiental y desarrollo sostenible: política ambiental en Colombia *Multiciencias*, vol. 14, núm. 2, abril-junio, 2014, pp.

- 123-128 Universidad del Zulia Punto Fijo, Venezuela.  
<https://www.redalyc.org/pdf/904/90432601005.pdf>
- Pérez, M. A. (2020). “Retos de la política ambiental colombiana frente a los desafíos de la OCDE y los ODS”. *Análisis Político*, 33(99), 101–120.  
<https://doi.org/10.15446/anpol.v33n99.90970>
- Pinilla, P. (2012). Sostenibilidad económica y medio ambiente en Colombia: muchas normas y poca aplicabilidad. *Revista Ingenio*, 5(1), 71–78.  
<https://doi.org/10.22463/2011642X.2175>
- PM Abogados. 2021. Ministerio de Minas y Energía declara de utilidad pública e interés social el Proyecto Sebastosol, así como los terrenos necesarios para su construcción y protección. Tomado de: <https://acortar.link/jr54OW>
- Preciado, L. 21 de Enero de 2022. Denuncian que parque eólico en La Guajira afectaría comunidades wayúu. Caracol Radio. Tomado de: [https://caracol.com.co/radio/2022/01/21/nacional/1642794979\\_310679.html](https://caracol.com.co/radio/2022/01/21/nacional/1642794979_310679.html)
- Ramírez, O. (2015). “Identificación de problemáticas ambientales en Colombia a partir de la percepción social de estudiantes universitarios localizados en diferentes zonas del país”. *Revista internacional de contaminación ambiental*, 31(3), 293-310. [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0188-49992015000300009&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992015000300009&lng=es&tlng=es).
- Ramos Barón, P. Romero Ángel, I. Buitrago, J. & Álvarez, J. Enero-abril de 2022. El gobierno Duque y el medioambiente: Caminos, contradicciones y retos. *Revista Ciencias CINEP*. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.revistacienciascinep.com/home/el-gobierno-duque-y-el-medioambiente-caminos-contradicciones-y-retos/>
- Redacción Semana. 28 de enero de 2022. En el gobierno Duque, capacidad instalada de energías renovables se multiplicó por 100. <https://www.semana.com/nacion/articulo/en-el-gobierno-duque-capacidad-instalada-de-energias-renovables-se-multiplico-por-100/202257/>
- Rodríguez Timaná, R. 20 de septiembre de 2021. Política de deforestación en Colombia (CONPES 4021 de diciembre de 2020). Universidad Externado de Colombia.

- Artículo en línea. Disponible en:  
<https://medioambiente.uexternado.edu.co/politica-de-deforestacion-en-colombia-conpes-4021-de-diciembre-de-2020/>
- Romero, J. 27 May de 2025. Gobierno Petro celebró golpe a la minería ilegal: desmantelaron operación que producía \$5.435 millones mensuales. Infobae. Artículo en línea. Disponible en:  
<https://www.infobae.com/colombia/2025/05/27/gobierno-celebra-golpe-a-mineria-ilegal-tenian-renta-de-5435-millones-mensuales/#:~:text=>
- Roth, A. 2002. Políticas Públicas. Ediciones Aurora.
- Rueda, S. (2018). *Justicia energética: El caso de la transición energética en México*. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 63(232), 241-260.
- Rueda, M. Agosto 7 de 2022. In historic shift, Gustavo Petro sworn in as Colombia’s first leftist president. PBS News. Artículo en línea. Disponible en:  
<https://www.pbs.org/newshour/world/in-historic-shift-gustavo-petro-sworn-in-as-colombias-first-leftist-president>
- Saavedra, F. 11 Abr, 2025. The Economist criticó la política ambiental de Gustavo Petro: calificó de “huecas” las promesas ecológicas del mandatario. <https://www.infobae.com/colombia/2025/04/11/the-economist-critico-la-politica-ambiental-de-gustavo-petro-califico-de-huecas-las-promesas-ecologicas-del-mandatario/>
- Sandoval, J. septiembre de 2022. DEFORESTACIÓN Y LA CAMPAÑA ARTEMISA EN COLOMBIA. Boletín estratégico multidisciplinar de la ESICI. [https://esici.edu.co/wp-content/uploads/2023/02/Boletin\\_08\\_V4.pdf](https://esici.edu.co/wp-content/uploads/2023/02/Boletin_08_V4.pdf)
- Soto, L., & Vieira, J. A. (2018). Hacia una política ambiental en Colombia para el pos-acuerdo: una mirada desde la responsabilidad social empresarial. NOVUM, revista de Ciencias Sociales Aplicadas, I (8), 9-31.
- Tarazona, D. & Parra de Moya, J. 5 dic 2022. Artemisa: radiografía de una operación gubernamental que no frenó la deforestación en Colombia. Mongabay. Artículo en línea. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2022/12/artemisa-radiografia-de-una-operacion-que-no-freno-la-deforestacion-en->

[colombia/#:~:text=La%20operaci%C3%B3n%20Artemisa%2C%20entre%20el,%2C%20Caquet%C3%A1%2C%20Putumayo%20y%20Amazonas.](#)

Tarazona. & Parra De Moya, J. 27 Apr 2023. Operation Artemis: Colombia’s failed military operation to stop deforestation. <https://news.mongabay.com/2023/04/operation-artemis-colombias-failed-military-operation-to-stop-deforestation/>

Tobasura, I. 2006. LA POLÍTICA AMBIENTAL EN LOS PLANES DE DESARROLLO EN COLOMBIA 1990-2006. Una visión crítica Revista Luna Azul, núm. 22, pp. 8-19 Universidad de Caldas Manizales, Colombia

Ubaque, J. C. (2022) “Geopolítica del narcotráfico y medio ambiente en Colombia”, *Fuerzas Armadas*, (259), pp. 81–92. Doi: 10.25062/0120-0631.401

Vargas, I., Gómez, A. & Rodríguez, G. 2020. “El desarrollo sostenible como política en Colombia: un análisis desde la protección de los páramos”. *Civilizar*, 20(38), 41-52. <https://doi.org/10.22518/jour.ccsj/2020.1a02>

Vergara, L. April 4, 2024. Gustavo Petro’s record on energy and environment, analysed. *Dialogue Earth*. Artículo en línea. Disponible en: <https://dialogue.earth/en/climate/390308-gustavo-petros-record-on-energy-and-environment-analysed/>

World Wildlife Fund. 23 de Enero de 2023. Estos serán los retos ambientales de Colombia para el 2023. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.wwf.org.co/?381010/Estos-seran-los-retos-ambientales-de-Colombia-para-el-2023>

Zapata, A. 22 de enero de 2022. Entró en operación Guajira 1, el parque eólico más grande de Colombia. *Diario el Colombiano*. Artículo en línea. Disponible en: <https://www.elcolombiano.com/inicio/ya-funciona-guajira-1-el-parque-eolico-mas-grande-de-colombia-OD16407382>